2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85, de 9.6.1994), anuncia la provisión de puesto de libre designación con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo de libre designación que se detalla en Anexo a la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Gobernación sita en Sevilla, Plaza Nueva núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los puestos que se solicitan, numerados por orden de preferencia y deberá ir acompañada de un «currículum vitae» en el que se hará constar, además del Número de Registro de Personal, Cuerpo de Pertenencia y destino actual, lo siguiente:

- a) Títulos Académicos.
- b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
- c) Años de servicio.
- d) Grado personal consolidado.
- e) Estudios y cursos realizados y cuantos otro méritos se relacionen con el contenido de los puestos que se solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente compulsadas. De la citada documentación, se presentarán tantas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- El Viceconsejero, José A. Sainz-Pardo Casanova.

A N E X O

- Núm. orden: 1.
- Centro directivo y localidad: D.G.A.L. y J. Sevilla.
- Denominación del puesto: Sec. Relaciones Institucionales.
- Núm. plazas: 1.
- ADS: F.
- GR: A.
- Nivel C.D.: 24.
- C. Específico: XXX-1.161.
- Cuerpo: P-A11.
- Exp.: 2.
- Titulación: Lcdo. Derecho.
- Méritos específicos: Experiencia en elaboración de textos legislativos y reglamentarios en la Comunidad Autónoma en materia de Colegios Profesionales y uniones de hecho. Experiencia en tramitación y gestión de procedimientos administrativos sobre nombramiento de Notarios y Registradores de la Propiedad. Experiencia en demarcación judicial, notarial y registral.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, por la que se ordena el cumplimiento de la ejecutoria recaída en el recurso núm. 2458/88 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, promovido por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación del Campo de Gibraltar contra esta Consejería.

El 20 de marzo de 1996 tuvo entrada en la Consejería de la Presidencia ejecutoria recaída en el recurso contencioso-administrativo número 2458/88 de la Sala de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, deducido por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación del Campo de Gibraltar contra el Acuerdo Marco de Colaboración suscrito, el 14 de octubre de 1987, entre el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Compareció

como codemandada en los autos de dicho recurso la citada Confederación.

En los autos referidos, el 28 de mayo de 1990, recayó sentencia cuyo fallo es como sigue:

«Que estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo formulado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación del Campo de Gibraltar contra el Acuerdo Marco de Colaboración de 14 de octubre de 1987 celebrado entre la Junta de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía (BOJA de 22 de marzo de 1988) y lo anulamos en cuanto supone: 1.º Reconocimiento en exclusiva a la CEA de la representación de los intereses generales de comerciantes, industriales y empresarios de Andalucía; 2.º Considerar a la CEA como único representante empresarial en los órganos de participación institucional de la Junta de Andalucía; 3.º Intervención, en exclusiva, de la CEA en las actuaciones de creación de nuevas empresas, elaboración de censos empresariales, difusión y promoción de enseñanzas comerciales, industriales y náuticas, apoyo y estímulo a la exportación, promoción de ferias y exposiciones, estudios e informes de carácter económico y mercantil y participación en acciones sobre planes de desarrollo, ordenación del territorio y localización industrial y comercial, y, en general, en todas aquellas que tengan relación con las competencias atribuidas en la actora. Sin costas».

Interpuesto recurso de apelación por las respectivas representaciones procesales de los demandados, el 13 de junio de 1995 el Tribunal Supremo (Sala Tercera. Sección sexta), dictó sentencia en el siguiente sentido:

«Fallamos: Que estimando parcialmente los recursos de apelación promovidos por las representaciones procesales de la Junta de Andalucía y la Confederación de Empresarios de la misma Comunidad Autónoma contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de fecha 28 de mayo de 1990, estimatoria también en parte del recurso número 2458/1988, interpuesto por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación del Campo de Gibraltar, contra la resolución del Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía de 19 de mayo de 1988, desestimatoria del recurso de reposición entablado contra el Acuerdo-Marco de colaboración celebrado por la expresada Junta y la Confederación de Empresarios de la misma Comunidad Autónoma; revocamos la referida sentencia en cuanto al pronunciamiento segundo que contiene ("considerar a la CEA como único representante empresarial en los órganos de participación institucional de la Junta"), el cual dejamos sin ningún valor ni efecto, y rectificando el primero que quedará redactado como "Reconocimiento en exclusiva a la CEA de la representación de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación de Andalucía", confirmamos en su integridad el tercero, sin que hagamos pronunciamiento especial sobre las costas causadas en ambas instancias».

Así, conforme a los artículos 117.3 de la Constitución, 21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 104 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Que se lleve a puro y debido efecto cuanto en dicha sentencia se dispone.

Sevilla, 25 de marzo de 1996

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia,
en funciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 18 de marzo de 1996, por la que se establecen las normas de evaluación de las actividades docentes de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

El proceso de la enseñanza/formación concluye, generalmente, con la calificación; aunque es evidente que todo ha de medirse, a veces resulta realmente difícil la cuantificación de ciertos aspectos del aprendizaje.

La evaluación forma parte esencial e inseparable del hecho educativo, no debiendo constituir una acción que se verifique de modo aislado; sino que habrá de coexistir de forma paralela y simultánea con el proceso del aprendizaje.

También supone un valioso indicador sobre la manera de desarrollarse la educación/formación. Así, el profesorado deberá reconducir su forma de enseñanza a la luz y en función de los resultados globales obtenidos por su alumnado.

Asimismo, se ha de tener presente la existencia de dos tipos de currículo: El currículo explícito, fácilmente reconocible y cuantificable, y el currículo implícito u oculto que trata la promoción y adquisición por el alumnado de toda una serie de actitudes, hábitos, valores, etc. Lógicamente, la medida de la consecución de este último es mucho más compleja.

Todo ello teniendo siempre como referente las características de diversidad presentes en el alumnado de la Espa. Diversidad tanto en lo relativo a los colectivos atendidos como, y muy especialmente, a la diversificación de capacidades y características físicas, sociales, culturales e intelectuales que cada una de las personas que viene a la Escuela trae como bagaje previo.

Además, la Espa, para dar una adecuada respuesta a las demandas formativas de los colectivos que componen la Seguridad Pública Local, a través de un modelo de enseñanza basado en la amplitud y especificidad de las áreas formativas impartidas, cuenta con un amplio cuadro de profesorado, en su mayoría colaborador, de dispar profesión.

Al objeto de garantizar la mayor objetividad en los procesos de evaluación del alumnado de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (Espa), se hace necesario disponer de una norma que homogenice y armonice, en lo posible, todos los aspectos relacionados con el proceso de evaluación del alumnado de los cursos y demás actividades formativas que imparta la Espa, según las competencias atribuidas por el Decreto de la Consejería de Gobernación 213/87, de 2 de septiembre.

En su virtud, de acuerdo con las facultades conferidas por el citado Decreto y previo informe favorable del Consejo Rector de la Espa de 12 de diciembre de 1995, dispongo:

Artículo único. Se aprueban las normas de evaluación por las que habrán de regirse todas las actividades docentes que imparta la Espa y que figuran a continuación:

NORMAS DE EVALUACION

La eficacia y validez de la evaluación educativa han de venir definidas por estas premisas:

- Objetividad del método elegido para evaluar.
- Imparcialidad de las pruebas.
- Adecuada baremación y calificación de las pruebas.
- Unidad de criterio entre el profesorado para la corrección de las mismas.